



---

## **CERTIFICACIÓN RELATIVA A INFORME**

---

**Acto que se certifica:** Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 24 de noviembre de 2022, por el que se ha aprobado el siguiente:

**INFORME SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS POSTALES EN DESARROLLO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 43/2010, DE 30 DE DICIEMBRE, DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL, DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y DEL MERCADO POSTAL**

### **I. ANTECEDENTES**

**1.** Con fecha 24 de junio de 2022, procedente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha tenido entrada en el Consejo General del Poder Judicial, a efectos de la evacuación del correspondiente informe, conforme a lo dispuesto en el artículo 561.1.6ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios Postales en desarrollo de lo establecido por la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal. El texto remitido viene acompañado de la memoria del análisis de impacto normativo (en lo sucesivo, MAIN).

**2.** La Comisión Permanente del Consejo, en su reunión del día 29 de junio de 2022 designó ponente de este informe a la vocal Dª Nuria Díaz Abad.

### **II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA FUNCIÓN CONSULTIVA DEL CGPJ**

**3.** La función consultiva del Consejo General del Poder Judicial a que se refiere el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en la redacción dada a dicho precepto por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio), tiene por objeto los anteproyectos de leyes y disposiciones generales que afecten total o parcialmente, entre otras materias expresadas en el citado precepto legal, a *«Normas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la*



*tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de los derechos fundamentales» (regla 6ª del art. 561.1 LOPJ).*

**4.** Con el fin de precisar el alcance de la potestad de informe de este Consejo en relación con el proyecto de Real Decreto remitido debe tenerse en cuenta que la propia MAIN justifica la petición de informe a este órgano constitucional en que el texto proyectado “afecta a los procedimientos de entrega de notificaciones judiciales” (página 27). Sin embargo, el contenido del presente informe ha de extenderse también a las notificaciones administrativas, dada la vinculación de éstas con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

**5.** Conviene comenzar recordando que el vigente Reglamento de Servicios Postales (en adelante, RSP) se aprobó por el Real Decreto 1829/1999, de 3 diciembre y se dictó en virtud de la habilitación reglamentaria contenida en la disposición final tercera de la Ley 24/1998, de 13 de julio, de servicio postal universal y liberalización de los servicios postales.

**6.** En su Título II el RSP regula las obligaciones de servicio público de los prestadores de servicios postales y dentro de su capítulo II se contiene el régimen de las obligaciones de servicio público del operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal. Dentro de este capítulo II del Título II del RSP, la sección 2ª (arts. 39 a 44) regula la admisión y entrega de notificaciones de órganos administrativos y judiciales, partiendo de la regla de que la entrega de notificaciones realizada por el operador al que se haya encomendado la prestación del servicio postal universal tendrá como efecto “la constancia fehaciente de su recepción, sin perjuicio de que los demás operadores realicen este tipo de notificaciones en el ámbito no reservado, cuyos efectos se regirán por las normas de derecho privado”.

**7.** Tras la derogación de la Ley 24/1998 por la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, la regulación contenida en el RSP en materia de notificaciones efectuada por el prestador del servicio postal universal debe entenderse como desarrollo del artículo 22.4 de la ley 43/2010 conforme al cual:

*“4. La actuación del operador designado gozará de la presunción de veracidad y fehaciencia en la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega de notificaciones de órganos administrativos y judiciales, tanto las realizadas por medios físicos, como telemáticos, y sin perjuicio de la aplicación, a los distintos supuestos de notificación, de lo dispuesto en la Ley*



*30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.*

*Las notificaciones practicadas por los demás operadores postales surtirán efecto de acuerdo con las normas de derecho común y se practicarán de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común."*

**8.** Los artículos 39 a 44 del vigente RSP, coherentemente con el artículo 22.4 de la Ley 43/2010, regulan la entrega de notificaciones tanto de órganos administrativos como de órganos judiciales.

**9.** Sin embargo, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2004 (ECLI:ES:TS:2004:3953) declaró la nulidad parcial del RSP por la omisión del trámite esencial consistente en el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial conforme al artículo 108.1.e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, vigente al tiempo de la aprobación del Real Decreto. Tal nulidad se circunscribió a la sección 2ª del capítulo II del Título II del RSP y dentro de ella a las normas relativas a las notificaciones de órganos judiciales, "dejándolas subsistentes en la aplicación a los órganos administrativos". Por tanto, los artículos 39 a 44 del RSP sólo están vigentes en la medida en que contienen la regulación de las notificaciones de los órganos administrativos, rigiéndose las notificaciones de las resoluciones judiciales por las previsiones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (arts. 270 a 272) y en las leyes procesales (arts. 149 y siguientes LEC).

**10.** Hay que tener en cuenta que la notificación de los actos administrativos es un acto de comunicación realizado por la Administración Pública y, como tal, tiene el carácter de acto administrativo, distinto y autónomo del acto objeto de notificación, no constituyendo requisito de validez de éste, sino de eficacia, ya que por medio de ella se trata de poner formalmente en conocimiento del interesado un acto cuyos efectos dependen precisamente de que esa puesta en conocimiento se haya realizado correctamente. Lo trascendente de toda notificación es que llegue a conocimiento del interesado la actuación de la Administración. Desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, la corrección de los actos de notificación de actos administrativos tiene relevancia constitucional, ya que la falta de conocimiento del acto por parte del interesado puede determinar su indefensión al no haber tenido la posibilidad de defenderse en el específico procedimiento administrativo; indefensión que no se reduce al procedimiento administrativo, pues la falta de conocimiento impide que el interesado pueda



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

acudir a los Tribunales cuestionando la ejecutividad del acto impugnado (SSTC 291/2000, de 30 de noviembre; 157/2007, de 2 de julio; 219/2007, de 8 de octubre).

**11.** La notificación es un “instrumento capital” del derecho de defensa, de manera que la práctica irregular de esta puede determinar la indefensión del interesado, por lo que la Administración debe adoptar las cautelas y garantías razonables para lograr el conocimiento del interesado (STC 221/2003, de 15 de diciembre).

**12.** A partir de esta conexión entre las notificaciones administrativas y el derecho a la tutela judicial efectiva hay que entender que la regulación proyectada se inserta en la materia referida en la regla 6ª del artículo 561.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto es, “normas [...] que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales”.

**13.** Sin perjuicio de lo anterior, y con arreglo al principio de colaboración entre los órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial ha venido indicando la oportunidad de efectuar en sus informes otras consideraciones relativas, en particular, a cuestiones de técnica legislativa o de orden terminológico, con el fin de contribuir a mejorar la corrección de los textos normativos y, por consiguiente, a su efectiva aplicabilidad en los procesos judiciales, por cuanto son los órganos jurisdiccionales quienes, en última instancia, habrán de aplicar posteriormente las normas sometidas a informe de este Consejo, una vez aprobadas por el órgano competente.

### **III. CONSIDERACIONES GENERALES**

**14.** El Proyecto que se informa está integrado por un Preámbulo, un artículo único, por el que se dispone la aprobación del nuevo RSP, que figura como anexo; una disposición derogatoria y tres disposiciones finales relativas a las facultades de desarrollo, el título competencial y la entrada en vigor.

**15.** El Reglamento, a su vez, se estructura en seis títulos, dedicado el primero a disposiciones generales; el segundo a los operadores postales, el tercero a los servicios y envíos postales; el cuarto a la intervención de los envíos postales e inspección postal; el quinto al Registro General de Empresas Prestadoras de Servicios Postales y el sexto al sello de excelencia de empresa postal sostenible.



**16.** Conviene también recordar que este Consejo en el Pleno de fecha 25 de marzo de 2021 emitió su informe sobre un Proyecto de Real Decreto por el que se pretendía modificar el RSP, modificación que no llegó a aprobarse. En dicho informe, sin embargo, se subrayaba que, de acuerdo con la jurisprudencia, los requisitos para la validez y eficacia de las notificaciones se enumeran en la Ley de Procedimiento Administrativo, cuyo ámbito no podrá ser restringido reglamentariamente, con una deslegalización no permitida constitucionalmente (sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1987, ECLI:ES:TS:1987:2048). Se permite, en cambio, que el RSP incluya garantías adicionales no previstas directamente por la Ley.

**17.** Así, por ejemplo, cabe entender la exigencia contenida en el artículo 38 RSP de que para la recepción de los envíos postales certificados, que son los utilizados para llevar a cabo las notificaciones, «deberá mediar autorización expresa de los destinatarios para que puedan ser entregados por el empleado del operador postal a las personas anteriormente mencionadas [porteros, encargados o gerentes de los complejos o de los edificios]», entendiéndose, que están autorizadas las personas indicadas en el artículo 32.1 RSP, esto es, “las personas mayores de edad presentes en su domicilio que sean familiares suyos o mantengan con él una relación de dependencia o convivencia”. Otro supuesto de garantía adicional contenida en el RSP es la exigencia prevista en el artículo 41.3 de que en la recepción de la notificación deba constar, además de la fecha, la identidad, número de documento nacional de identidad o documento que lo sustituya del receptor, “la firma del interesado o persona que pueda hacerse cargo de la notificación”. El requisito de la firma del receptor, no expresamente previsto en la Ley, contribuye al cumplimiento del mandato legal de que “se haga constar la identidad” del receptor (art. 42.2 LPAC y art. 59.2 Ley 30/1992).

**18.** La necesidad de que conste la firma del receptor para tener por válida la notificación ha sido apreciada por la jurisprudencia de conformidad con el principio antiformalista que rige en la valoración de la suficiencia de los elementos formales de la notificación a los efectos de tenerla por válida, derivado, a su vez, del principio de buena fe que impide que el administrado pueda enervar la eficacia de los actos administrativos mediante tácticas obstaculizadoras o elevando a garantía esencial lo que son meros requisitos formales (sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2014, ECLI:ES:TS:2014:682). Pero, como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:4314) “la eficacia de las notificaciones se encuentra estrechamente ligada a las circunstancias del caso lo que comporta inevitablemente un importante grado de casuismo en la materia”.



**19.** La jurisprudencia ha distinguido respecto de las formalidades exigidas normativamente para cumplimentar la notificación entre aquellas de carácter esencial - esto es, las consideradas imprescindibles como medio para garantizar que la comunicación del acto o resolución tiene lugar y cuyo incumplimiento determina que deba presumirse que éstos no han llegado a conocimiento tempestivo del interesado, causándole indefensión - y las formalidades de carácter secundario, cuyo incumplimiento no determina irremisiblemente la ineficacia del acto de comunicación.

**20.** En relación con la firma, dependiendo de las circunstancias concurrentes, la recepción de la notificación por persona identificada aunque se niega a firmar es considerada válida (por ejemplo, STS de 6 de octubre de 2011, ECLI:ES:TS:2011:6950). El criterio jurisprudencial es que tanto la firma como los demás extremos que deben constar en el acuse de recibo, conforme al artículo 41.3 RSP, constituyen formalidades de carácter secundario, no sustancial, y operan como signos materiales externos que permiten revelar o presuponer una toma de conocimiento del acto notificado, pero la falta de alguno o alguno de esos datos no convertirá, automáticamente, en ineficaz la notificación. La sentencia 17 de febrero de 2014, anteriormente citada, recoge una serie de supuestos de incumplimiento de formalidades que no enerva la validez y eficacia de la notificación.

**21.** Pero debe tenerse en cuenta que, aunque la firma del receptor es una formalidad secundaria cuya ausencia en el acuse de recibo no determina *per se* la ineficacia de la notificación, sino que dependerá del análisis de las circunstancias concurrentes, de este carácter de formalidad secundaria no cabe deducir la total irrelevancia de la firma, pues cuando conste puede operar como factor que, en unión de otros, permita afirmar la corrección de la notificación. Así, se desprende de la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 1998 (ECLI:ES:TS:1998:1273) que recoge los distintos elementos que deben concurrir en la práctica de la notificación:

*"Esta Sala tiene establecida la doctrina de que supuesto que en el mencionado domicilio no se hallare el contribuyente (tanto si la notificación se practica por medio de Agente, como por Correo), la correspondiente cédula puede ser entregada a cualquier persona que se encuentre en el mismo, siempre que:*  
*a) reúna las condiciones generales de capacidad para asumir la obligación jurídica derivada de la recepción; b) conste su identificación nombre y apellidos, documento nacional de identidad, etc.; c) se exprese el parentesco con el contribuyente o la razón de permanencia en aquel domicilio, y d) conste su aceptación o firma. Así, la sentencia de 17 de marzo de 1987 (reiterando anterior doctrina contenida en las sentencias de 9 de mayo y 18 de octubre*



*de 1983, 14 de febrero de 1984 y 8 de octubre de 1985) tiene dicho que la notificación practicada no puede estimarse correcta, ya que no está firmada por el interesado sino por persona distinta, cuya identidad se ignora, de la que también se desconoce la relación con el destinatario y la razón de su estancia en el lugar en que se efectuó la notificación.”*

**22.** El artículo 44 del RSP actualmente vigente regula la entrega de notificaciones a personas jurídicas y organismos públicos, exigiendo en su apartado 2, para el caso de las personas jurídicas, que se haga “constar en la documentación del empleado del operador postal y, en su caso, en el aviso de recibo que acompañe a la notificación, su identidad, firma y fecha de la notificación, estampando, asimismo, el sello de la empresa”. Por su parte, el apartado 3, en relación con los organismos públicos, establece que se hará “constar en la documentación del empleado del operador postal y, en su caso, en el aviso de recibo que acompañe a la notificación, su identidad, firma y fecha de la notificación, estampando, asimismo, el sello del organismo público”.

**23.** Respecto del sello de empresa o sello del organismo públicos cabe trasladar las consideraciones efectuadas sobre la constancia de la firma del receptor. Se trata de una garantía adicional contemplada en el reglamento que debe calificarse como formalidad secundaria, no esencial, que opera como factor para determinar la validez y eficacia de la notificación. Así se recoge en la sentencia de 26 de mayo de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:4107):

*«[...] tampoco puede otorgarse eficacia invalidante a la ausencia del sello de la empresa, pues esta Sala ha admitido la notificación realizada en un domicilio que anteriormente tenía la entidad, y que sigue siendo de empresas del mismo grupo empresarial, habiéndose firmado por quien se identifica como empleado, consigna su DNI, incluso cuando no figure en el acuse de recibo el sello de la empresa [Sentencia de 14 de marzo de 2011 (rec. cas. núm. 5455/2007), FD Cuarto]. De acuerdo con nuestra jurisprudencia, estamos, por lo tanto, ante formalidades de carácter secundario, no sustancial, lo que supone que opera la presunción de que el acto ha llegado a conocimiento tempestivo de la entidad.»*

#### **IV. CONSIDERACIONES PARTICULARES**

**24.** El propósito de la reforma reglamentaria en lo que interesa al presente informe es, según dispone el Preámbulo de la Real Decreto proyectado, el de exceptuar “de esta normativa técnico postal aspectos que hasta ahora estaban tangencialmente regulados en ella, pero cuyo acomodo debe hacerse



en las normas que regulan las materias propias del procedimiento administrativo, particularmente las especificidades en lo que se refiere a las notificaciones administrativas y judiciales que las Administraciones públicas y los órganos del poder judicial dirigen a los ciudadanos, a través de envíos postales.”

**25.** De esta forma, el texto proyectado supone, en lo que interesa al objeto del presente informe, la casi total supresión de la regulación de la “Admisión y entrega de notificaciones de órganos administrativos y judiciales” que se contiene en los artículos 39 a 44 del vigente RSP.

**26.** Así, las únicas prescripciones sustantivas equivalentes a las contenidas en los referidos preceptos 39 a 44 del vigente RSP que pasarían a integrarse en la norma proyectada son (i) la establecida en el proyectado artículo 29 del nuevo reglamento en relación con la admisión de notificaciones administrativas o judiciales, cuya regulación actual se contiene en el vigente artículo 40 del RSP (ii) la establecida en el proyectado artículo 30 del nuevo reglamento en cuanto a la entrega de notificaciones administrativas o judiciales, cuya regulación actual se contiene en el vigente artículo 41.1 del RSP.

**27.** La regulación de la **admisión de notificaciones administrativas o judiciales** contenida en el artículo 29 del Decreto proyectado es esencialmente coincidente con la que se contiene en el actual artículo 40 del vigente RSP. La redacción propuesta dispone que “La admisión de notificaciones de órganos administrativos y judiciales por los operadores postales requiere que en el envío conste la palabra “Notificación” y, debajo de ella y en caracteres de menor tamaño, el acto a que se refiera (citación, requerimiento, resolución) y la indicación “Expediente núm..” o cualquier otra expresión que identifique el acto a notificar. Estos envíos se presentarán acompañados de una relación detallada de los mismos que, una vez sellada por el operador postal, servirá de justificante de su admisión.”

**28.** Como se ha apuntado, la redacción propuesta es esencialmente coincidente con la contenida en el vigente RSP, siendo la única novedad la de exigir que los envíos se presenten “acompañados de una relación detallada de los mismos que, una vez sellada por el operador postal, servirá de justificante de su admisión”, lo que no puede sino valorarse positivamente.

**29.** Por lo que hace a la regulación de la **entrega de notificaciones administrativas o judiciales**, el artículo 30 del proyecto que se informa actualiza la remisión normativa, contenida en el apartado 1 del vigente





artículo 41 del RSP, a la vigente Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

**30.** Ocurre que, en la medida en que el precepto pretende disciplinar no sólo la entrega de las notificaciones administrativas sino también la de las judiciales, la expresa remisión normativa que el mismo recoge debería hacer también alusión a las específicas normas rectoras de estas últimas, que, como tuvo ocasión de enfatizar la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2004 (ECLI:ES:TS:2004:3953) a la que se ha hecho anterior mención en este informe, son las contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (arts. 270 a 272) y en las leyes procesales (arts. 149 y siguientes LEC).

**31.** El artículo 30 del proyecto que se informa introduce, así mismo, una referencia "a las condiciones establecidas contractualmente entre el operador y la administración contratante del servicio" como fuentes reguladoras de los requisitos de la entrega de notificaciones. En relación con esta previsión llama la atención, de una parte, que los requisitos de la práctica de las notificaciones se sometan a los que contractualmente pueda pactarse entre el operador y la Administración -previsión que no recogía el proyecto de modificación reglamentaria en materia de notificaciones administrativas sobre el que este Consejo tuvo ocasión de pronunciarse mediante acuerdo plenario de fecha 25 de marzo de 2021- y, de otra, que se supriman las disposiciones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 41, del RSP, que contenían una serie de garantías adicionales a la entrega de este tipo de notificaciones, conforme a las cuales

*"2. Cuando se practique la notificación en el domicilio del interesado y no se halle presente éste en el momento de entregarse dicha notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.*

*3. Deberá constar la fecha, identidad, número del documento nacional de identidad o del documento que lo sustituya y firma del interesado o persona que pueda hacerse cargo de la notificación en los términos previstos en el párrafo anterior, en la documentación del empleado del operador postal y, en su caso, aviso de recibo que acompañe dicha notificación, aviso en el que el empleado del operador postal deberá hacer constar su firma y número de identificación. "*

**32.** De los vigentes artículos 39, 41, 42, 43, y 44 del RSP, que tienen por objeto la regulación del carácter fehaciente de la notificación, de las disposiciones generales sobre la entrega de notificaciones, de los supuestos



de notificaciones con dos intentos de entrega, de los supuestos de notificaciones con un intento de entrega y de la entrega de notificaciones a personas jurídicas y organismos públicos, solo pervive en el decreto proyectado, como ha quedado expuesto, una regla equivalente a la contenida en el apartado primero del artículo 41 del vigente RSP.

**33.** Como este Consejo tuvo ocasión de señalar en el informe aprobado por Acuerdo del Pleno de fecha 25 de marzo de 2021 sobre la reforma del RSP que no llegó a aprobarse

***"36.-** La LPAC no ha introducido en este punto ningún cambio relevante respecto de la regulación contenida en la Ley 30/1992. En ambos textos legales se exige en relación con la práctica de las notificaciones que cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado se haga constar la identidad del receptor (art. 42.2 LPAC y art. 59.2 Ley 30/1992). En este sentido, la identificación del receptor es considerada por la jurisprudencia, como se ha expuesto, como un requisito esencial para la validez de la notificación, exigiéndose con todo rigor y anudando su incumplimiento a la ineficacia de ésta (entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1992 y de 20 de enero de 1995 [ECLI: ES:TS:1995:8797]). Recogiendo esta jurisprudencia, el RSP optó por enumerar una serie de requisitos (identidad, DNI o documento que lo sustituya, y firma) que conjuntamente podían coadyuvar al correcto cumplimiento de la identificación del receptor, asegurando una notificación válida y eficaz. Tales elementos se configuran, como se ha indicado, como formalidades secundarias, no esenciales, de modo que la ausencia de alguna de ellas no determina por sí sola la ineficacia de la notificación.*

***37.-** Más allá de la voluntad de hacer coextensa la regulación reglamentaria con la regulación legal, no se aduce en el preámbulo de la norma proyectada ni en la MAIN razón substantiva que justifique el cambio normativo propuesto.*

***38.-** Desde el punto de vista de la protección de datos personales, podría pensarse que en el planteamiento del proyecto subyace una valoración del carácter no necesario de la constancia de ciertos datos de las personas receptoras a los efectos del fin legal de hacer constar la identidad del receptor. En este sentido, podría estimarse que el consignar el número de DNI o la firma constituyen tratamientos de datos no necesarios para la finalidad del tratamiento y, por tanto, conforme al principio de minimización de datos (art. 5.1.c del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo*



*que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos) no resulta proporcional mantener su exigencia en el RSP.*

**39.-** *Ahora bien, no es menos cierto que la constancia de estos datos personales en el acuse de recibo de la notificación no se considera por la jurisprudencia como irrelevante o innecesaria, en todo caso. Al contrario, como se ha puesto de manifiesto, la consignación de tales datos personales constituye una serie de formalidades secundarias cuyo cumplimiento, aunque no resulta exigible en su integridad y con total rigor, permite valorar el correcto discurrir de la práctica de la notificación y estimar que se ha cumplido con el fin de relevancia constitucional de asegurar que el destinatario tenga conocimiento del acto. No debemos olvidar que los actos de notificación cumplen una función relevante, ya que, al dar noticia de la correspondiente resolución, permiten al afectado adoptar las medidas que estime más eficaces para sus intereses, singularmente la oportuna interposición de los recursos procedentes, de modo que asegurar la corrección de la práctica de la notificación satisface una finalidad constitucional vinculada con el derecho a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión (art. 24.1 CE).*

**40.-** *La reforma reglamentaria proyectada no incurre en ultra vires, reduciendo garantías legalmente establecidas, ni contraviene el tenor de la Ley. Desde este punto de vista, se acomoda al espacio normativo delimitado por el principio de legalidad y accesible al poder reglamentario. Sin embargo, el poder reglamentario también está vinculado positivamente a los derechos fundamentales de los que emanan impulsos y líneas directivas que deben guiar, dentro del respeto a la Ley, las opciones normativas del reglamento. En sentido, del derecho a la tutela judicial efectiva y no sufrir indefensión (art. 24 CE) cabe derivar un mandato de optimización en la configuración normativa de la entrega de las notificaciones conforme al cual debe garantizarse en la mayor medida posible que el destinatario pueda tener conocimiento del acto notificado. Los requisitos contemplados hoy en los artículos 41 y 44 del RSP tiene ese sentido teleológico.*

**41.-** (...)

**42.-** *A partir de las anteriores consideraciones, cabe señalar que la supresión de las garantías adicionales prevista en los artículos 41 y 44 RSP operada por la reforma proyectada no resulta conveniente desde la óptica del aseguramiento de una correcta práctica de los actos de comunicación de las resoluciones y actos de la Administración, en interés del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Se trata, ciertamente, conforme a la jurisprudencia, de formalidades secundarias, pero no irrelevantes. Por ello se*



*sugiere valorar la oportunidad de mantener la redacción vigente de los preceptos reglamentarios.”*

**34.** Es cierto que la justificación de la supresión de la regulación contenida en los preceptos del reglamento vigente que no se trasladan al decreto proyectado no se circunscribe -como ocurría con la anterior propuesta de modificación del RSP que fue objeto del informe aprobado por el acuerdo adoptado por el Pleno de este Consejo en su reunión del día 25 de marzo de 2021- a la mera voluntad de hacer coextensa la regulación reglamentaria con la regulación legal.

**35.** Ello es así por cuanto la motivación justificativa de tal supresión, tal y como se desprende del Preámbulo del decreto proyectado, conecta con la expresa declaración de voluntad de residenciar en “las normas que regulan las materias propias del procedimiento administrativo” -entre las que no se cuenta “la normativa técnico postal” las especificidades referidas a las notificaciones administrativas y judiciales que las Administraciones públicas y los órganos del Poder Judicial dirigen a los ciudadanos, a través de envíos postales.

**36.** Con todo, en línea con lo que este Consejo tuvo ocasión de señalar en el acuerdo del Pleno de 25 de marzo de 2021 a que se ha hecho repetida alusión en este informe, debe concluirse que la supresión de las garantías adicionales contenidas en la actual regulación incorporada al RSP- singularmente las previstas en los artículos 41 y 44 RSP- operada por la reforma proyectada, no resulta conveniente desde la óptica del aseguramiento de una correcta práctica de los actos de comunicación de las resoluciones y actos de la Administración, en interés del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

**37.** Por lo que se sugiere valorar la oportunidad de incorporar al nuevo reglamento una regulación equivalente a la que se contiene en la norma que se propone sustituir y suprimir la remisión que se hace en el artículo 30 del texto proyectado a las condiciones establecidas contractualmente entre el operador y la Administración contratante del servicio.

**38.** En otro orden de cosas, el proyecto de reglamento sometido a informe no contempla regla alguna que pueda considerarse equivalente a la hasta ahora contenida en el artículo 50 del vigente RSP en cuanto dispone que “Además de las obligaciones contenidas en este capítulo y en el anterior, el Gobierno podrá imponer al operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal, otras obligaciones de servicio público distintas



de las establecidas en el capítulo II del Título III de la Ley 24/1998, de 13 de julio, para garantizar la adecuada prestación de aquél y cuando así lo exijan razones de interés general, cohesión social o territorial, mejora de la calidad de la educación y protección civil o cuando sea necesario para salvaguardar el normal desarrollo de los procesos electorales, de conformidad con lo dispuesto en la normativa que regula el régimen electoral general”

**39.** Como quiera que cualquier afectación al “normal desarrollo de los procesos electorales” puede incidir sobre las garantías del derecho de sufragio activo, consagrado como derecho fundamental en el artículo 23 de la Constitución Española, debe concluirse, a los efectos de su toma en consideración como objeto propio del presente informe que en este caso resulta igualmente concernida la materia referida en la regla 6ª del artículo 561.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto es, “normas [...] que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales.”

**40.** Situados en esta perspectiva resulta oportuno señalar en este informe que la eliminación de cualquier regla equivalente a la actualmente contenida en el artículo 50 del vigente RSP debería ser objeto de consideración, en línea con la preocupación por la salvaguarda del derecho de sufragio activo recientemente manifestada por el legislador en la Ley Orgánica 12/2022, de 30 de septiembre, de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero. Por todo ello se sugiere valorar, también en esta materia, la oportunidad de incorporar a la norma proyectada una regulación equivalente a la que se contiene en la norma que se propone sustituir.

## **V. CONCLUSIONES**

**PRIMERA.** - El presente informe se ciñe a los preceptos introducidos en la reforma referentes a las notificaciones administrativas y judiciales.

**SEGUNDA.** - En cuanto a la regulación de la admisión de notificaciones administrativas o judiciales contenida en el artículo 29 del Decreto proyectado es esencialmente coincidente con la que se contiene en el artículo 40 del vigente RSP, siendo la única novedad la de exigir que los envíos se presenten “acompañados de una relación detallada de los mismos que, una vez sellada por el operador postal, servirá de justificante de su admisión”, lo que no puede sino valorarse positivamente.



**TERCERA.** - Por lo que hace a la regulación de la entrega de notificaciones administrativas o judiciales, el artículo 30 del proyecto que se informa actualiza la remisión normativa, contenida en el apartado 1 del vigente artículo 41 del RSP, a la vigente Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ocurre que, en la medida en que el precepto pretende disciplinar no sólo la entrega de las notificaciones administrativas sino también la de las judiciales, la expresa remisión normativa que el mismo recoge debería hacer también alusión a las específicas normas rectoras de estas últimas, que, como tuvo ocasión de enfatizar la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2004 (ECLI:ES:TS:2004:3953) a la que se ha hecho anterior mención en este informe, son las contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (arts. 270 a 272) y en las leyes procesales (arts. 149 y siguientes LEC).

**CUARTA.** - La regulación de la entrega de notificaciones administrativas o judiciales, contenida en el artículo 30 del proyecto reglamentario sometido a informe introduce una referencia "a las condiciones establecidas contractualmente entre el operador y la administración contratante del servicio" como fuentes reguladoras de los requisitos de la entrega de notificaciones. En relación con esta previsión llama la atención, de una parte, que los requisitos de la práctica de las notificaciones se sometan a los que contractualmente pueda pactarse entre el operador y la Administración - previsión que no recogía el proyecto de modificación reglamentaria en materia de notificaciones administrativas sobre el que este Consejo tuvo ocasión de pronunciarse mediante acuerdo plenario de fecha 25 de marzo de 2021- y, de otra, que se supriman las disposiciones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 41, del RSP, que contenían una serie de garantías adicionales a la entrega de este tipo de notificaciones.

**QUINTA.-** En línea con lo que este Consejo tuvo ocasión de señalar en su informe de 25 de marzo de 2021 al proyecto de modificación del RSP, debe concluirse que la supresión de las garantías adicionales contenidas en la actual regulación incorporada al RSP – singularmente las previstas en los artículos 41 y 44 RSP- operada por la reforma proyectada, no resulta conveniente desde la óptica del aseguramiento de una correcta práctica de los actos de comunicación de las resoluciones y actos de la Administración, en interés del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Por lo que se sugiere valorar la oportunidad de incorporar al nuevo reglamento una regulación equivalente a la que se contiene en la norma que se propone sustituir y suprimir la remisión que se hace en el artículo 30 del texto proyectado a las condiciones establecidas contractualmente entre el operador y la Administración contratante del servicio.



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Secretaría General

**SEXTA.-** El proyecto de reglamento sometido a informe no contempla regla alguna que pueda considerarse equivalente a la hasta ahora contenida en el artículo 50 del vigente RSP en cuanto dispone que "Además de las obligaciones contenidas en este capítulo y en el anterior, el Gobierno podrá imponer al operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal, otras obligaciones de servicio público distintas de las establecidas en el capítulo II del Título III de la Ley 24/1998, de 13 de julio, para garantizar la adecuada prestación de aquél y cuando así lo exijan razones de interés general, cohesión social o territorial, mejora de la calidad de la educación y protección civil o cuando sea necesario para salvaguardar el normal desarrollo de los procesos electorales, de conformidad con lo dispuesto en la normativa que regula el régimen electoral general." Como quiera que cualquier afectación al "normal desarrollo de los procesos electorales" puede incidir sobre las garantías del derecho de sufragio activo, consagrado como derecho fundamental en el artículo 23 de la Constitución Española, se sugiere valorar, la oportunidad de incorporar a la norma proyectada una regulación equivalente a la que se contiene en la norma que se propone sustituir.

Es todo cuanto tiene que informar el Consejo General del Poder Judicial.

Lo precedente concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que conste extiendo y firmo la presente en Madrid, 25 de noviembre de 2022.

José Luis de Benito y Benítez de Lugo  
Secretario General  
(firmado digitalmente)